

La sociedad chilena a cinco años del estallido de octubre 2019

Chile y sus demandas latentes

por Manuel Antonio Garretón M.*

Más allá del análisis mismo del estallido de Octubre de 2019 nos interesa examinar las consecuencias que tuvo para la sociedad chilena de hoy tanto el mismo como el proceso constituyente que le siguió.

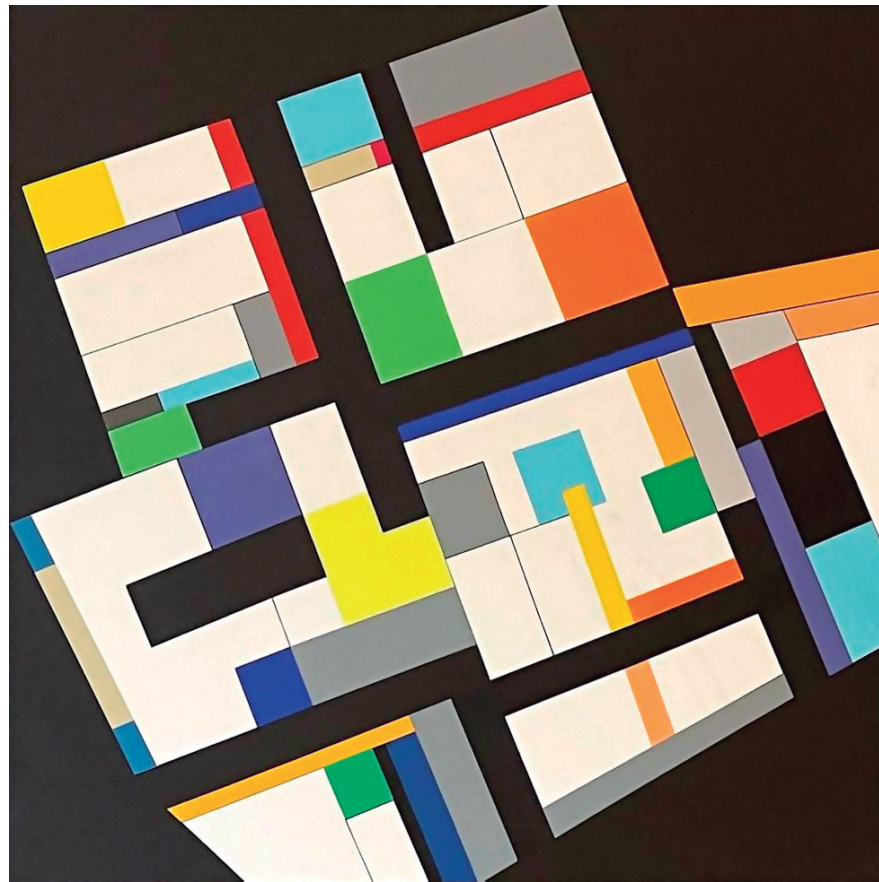
Partamos señalando que, desde mi perspectiva, el estallido significó, básicamente rechazo de un orden socio económico en múltiples dimensiones y del funcionamiento de la política y de los grupos y sectores dominantes denominados genéricamente elites en ambas esferas. De alguna manera las consignas “no son treinta pesos sino treinta años”, más allá de su exactitud, y “basta de abusos” expresaban este rechazo y la proclama de dignidad la demanda de un nuevo orden.

Se trataba de una de las movilizaciones más grandes y de más impacto en nuestra historia pero con rasgos relativamente inéditos. No había en un primer momento demandas sino esta expresión de rechazo y descontento, aunque luego los diversos sectores involucrados fueron produciendo cada uno sus propios conjuntos de demandas. Tampoco había en sentido estricto liderazgos ni interlocutores del conjunto del movimiento, ni presencia relevante conductora o mediadora de los partidos como había sido lo permanente con pocas excepciones en las movilizaciones sociales en Chile y sobre todo, no puede hablarse de un proyecto alternativo de sociedad sino la expresión de este rechazo y malestar.

Crisis política y social

El rechazo a las expresiones de violencia y delincuencia por parte de grupos que no tenían nada que ver con el espíritu de las movilizaciones y a la respuesta agresiva del gobierno de Sebastián Piñera con sus innegables violaciones masivas de derechos humanos, se acompañó de un gran apoyo de la opinión pública manifestado a través de las encuestas y especialmente de movilizaciones masivas a lo largo del país, principalmente la del 25 de octubre, así como de las asambleas autoconvocadas y la participación masiva en un plebiscito convocados por la organización nacional de municipalidades. Ver en todo ello las potencialidades de una revolución que serían abortadas por los sectores dominantes y la denominada clase política o solamente actos de delincuencia o solo pulsiones juveniles en el marco de una modernización capitalista, constituyen un profundo error, por razones distintas en cada caso.

Lo que es evidente es que se vivía una crisis social y política que debía ser enfrentada por fórmulas políticas que permitieran no solo resolver los problemas inmediatos sino aquellas dos cuestiones de fondo que hemos indicado: nuevo orden socio económico que permitiera superar las injusticias del modelo vigente y nuevas formas de gobierno y de



Hugo Correa, *Caminos* (Óleo sobre tela), 2024 (Exposición en Galería La Sala)

reconstruir la comunidad política rota que permitieran superar los déficit de la democracia y profundizarla. Y en la superación de la crisis de ese momento debía tener un rol preponderante la ciudadanía movilizada. En la ausencia de consenso del mundo político muy fuertemente dividido y su pérdida de legitimidad ante los sectores movilizadores, la solución desde la clase política sólo podía ser con algún consenso mayoritario de ella en torno a un procedimiento dejándole a la ciudadanía la definición de los contenidos.

Proceso constituyente

Parte importante de los sectores movilizados y de la izquierda así como la extrema derecha se opusieron en un principio al proceso, y posteriormente los dos primeros se incorporaron siendo los sectores representantes de los sectores movilizados con apoyo de la izquierda los que elaboraron el proyecto de nueva Constitución rechazado por la mayoría de la ciudadanía. Y ahí estriba la paradoja: en el primer plebiscito la respuesta de la ciudadanía fue contraria a la propuesta hecha por los sectores movilizados durante el estallido, predominantes en la Convención Constitucional. En el segundo proceso constituyente la extrema derecha constituida como fuerza mayoritaria en lo que se denominó el Consejo Constitucional -diseñado por el Congreso y precedido por un proyecto elaborado por consenso de la Comisión de Expertos, con representantes de todos los sectores, definida por el Congreso- impuso sus términos y su proyecto de nueva Constitución fue derrotado también en un plebiscito por la ciudadanía. De esta

manera se ponía término a los procesos definidos para resolver la crisis desatada por el estallido y los dos grandes problemas que afectaban a la sociedad chilena y que estaban en el origen de aquel.

Con el fracaso del proceso constituyente el malestar y el rechazo expresado en el estallido así como las demandas sociales quedaron sin resolver y con ello los problemas de fondo que lo habían originado y que persisten en la sociedad chilena. Con ello se perdía también un elemento principal que facilitaba la realización del programa del Presidente Boric. Si el clima social que dio origen al estallido fue como hemos dicho de rechazo y desesperanza, en el curso del proceso abrió horizontes de esperanza. Y junto a la frustración de esas esperanzas en el cumplimiento de sus demandas debido al fracaso de los proyectos constituyentes, en estos cinco años ello se ha agravado, por un lado, por la incorporación de miedos e inseguridad debido a la violencia y delincuencia especialmente del crimen organizado, y, por otro, de desconfianza y rechazo a la política institucional por los problemas de corrupción. En el curso de este tiempo si el descontento y la desconfianza en instituciones y el rechazo las elites se mantienen, ello se da ahora en un clima de menor esperanza en la posibilidad de cumplimiento a las demandas expresadas tanto en el estallido como en el proceso constituyente.

A cinco años del estallido de octubre de 2019, la sociedad chilena se presenta más quebrada y carente de esperanzas que en aquella época, en parte con la pandemia que puso fin a las movilizaciones que, aunque

con menor fuerza, continuaban después del Acuerdo para realizar un proceso constituyente. Sobre todo debido al fracaso de éste y al clima predominante en los últimos años de inseguridad producto de la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que puso este problema en el centro de las demandas ciudadanas y el que pese a avances parciales se ha transformado en una cuestión central para la ciudadanía. Pero también debido a la mantención de los rasgos estructurales que desencadenaron el estallido.

Crisis de representación

La cuestión estructural descansa en dos aspectos. El primero es evidentemente el orden socio económico basado en el rasgo central del neoliberalismo cual es la profunda desigualdad. El segundo, en parte también expresión del primero es la denominada ruptura de la relación clásica en la historia de Chile desde mediados del siglo pasado entre política y sociedad. Ello, como ha sido señalado por diversos autores e informes a su vez tiene, al menos, tres dimensiones: Por un lado, la crisis de representación -que es otra manera de hablar de la distancia o ruptura entre el mundo social y el mundo de las elites- muy profunda y difícilmente reversible debido a los rasgos propios de la época y de la sociedad contemporáneas. Por otro, la distancia y tensión de la ciudadanía y de los movimientos sociales que se hacen evidentes en el proceso constituyente. Por último, una dimensión cultural que consiste en que el mundo de la subjetividad de las personas, con un marcado individualismo, se aparta y rechaza las lógicas de la política que no sea la que se liga directamente con sus demandas individuales o de grupos, lo que hace muy difícil la adhesión a proyectos colectivos.

Pero a esta dimensión estructural hay que agregarle la oposición radical y extrema de los sectores políticos y económicos de derecha a cualquier cambio significativo, y las dificultades encontradas por el gobierno y sus sectores de apoyo que hacían de la acogida a las demandas sociales y al proceso constituyente la respuesta al descontento masivo.

Así estamos, sin haber resuelto los problemas que desataron el estallido, en una sociedad que no tiene proyecto, ni una fuerza política social que encauce un proceso con un horizonte de transformación y profundización democrática.

Pese a todo ello, la esperanza y búsqueda de cambio social en las dos dimensiones que motivaron el estallido -las injusticias y desigualdades del orden socio económico y la necesidad de una nueva relación entre política y sociedad o reconstrucción de una comunidad política- están latentes a la búsqueda de un relato que ligue demandas individuales con un horizonte colectivo, con una propuesta de orden alternativo que dé cuenta de las distintas problemáticas de la época y de las nuevas subjetividades. ■

*Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Profesor titular Universidad de Chile.